



ATENTAN CONTRA LA CUARENTENA

**SOBREPREGIOS / PAGAN LA DEUDA / AUMENTA
EL HAMBRE / SIGUEN LAS SUSPENSIONES
Y DESPIDOS / REBAJAN LOS SALARIOS**

Aunque Fernández puede todavía prorrogar la cuarentena, cientos de miles de trabajadores van quedando privados del resguardo frente a la pandemia.

El lobby de la UIA y la CGT va librando cada vez más sectores de la suspensión de actividades. Toda actividad industrial, extractiva y agraria se encuentra en funcionamiento. El fin de semana se anunciarán nuevas “excepciones”.

Esto no es porque ya hayamos pasado lo peor del contagio. La poca cantidad de test de coronavirus hace que estemos a ciegas sobre el desarrollo real de la enfermedad en el país. De todas maneras, incluso teniendo pocos datos, es claro que la enfermedad sigue creciendo.

El gobierno no se ha cansado de felicitarse a sí mismo por “privilegiar la salud y la vida por sobre la economía”. Pero en cada choque han primado los intereses económicos de los poderosos y se han postergado la salud y la vida de los trabajadores.

El decreto contra despidos y suspensiones es papel mojado. Con el concurso de la CGT albertista están pasando todos los despidos que las patronales disponen. Empezando por los 1.450 de Techint que dieron inicio al conflicto. Y siguiendo por

cientos de empresas que despiden, suspenden, restringen pagos y rebajan salarios. Desde las hiperlucrativas mineras a las cadenas de comida rápida, que quieren pasar por encima los magros salarios de sus empleados.

El desprecio por el pueblo trabajador se ve en el calvario impuesto a los jubilados para cobrar sus ingresos. O en el robo de los fondos para comprar alimentos. De los 12 millones de inscriptos para cobrar 10 mil pesos de subsidio por hambre en abril, no ha cobrado ninguno. Millones serán excluidos con distintos argumentos. Los que queden deberán esperar varias semanas más, en plena urgencia.

El Estado no está “presente” para salvaguardar la vida. Los superpoderes del Presidente son papel mojado frente a los grupos económicos, el orden social capitalista está primero.

Más que nunca por comisiones obreras y populares para controlar las condiciones de salud e higiene en cada lugar de trabajo y cada barrio. Como lo muestran las reacciones obreras en Argentina y el mundo, sólo los trabajadores defenderemos nuestra salud y nuestras vidas.



Reperfilando para pagar

Como se viene haciendo desde que Hernán Lacunza, entonces ministro de Macri, anunció el famoso reperfilamiento a principios de septiembre, el gobierno nacional emitió un decreto postergando hasta el 31 de diciembre de este año los pagos por vencimientos de la deuda en dólares emitida bajo legislación local. Sumados los montos de las Letes, que ya habían sido reperfiladas con los bonos que ahora se agregan, totalizan cerca de 10.000 millones de dólares.

No estamos ante un cambio en la orientación que se trazó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción, cuya prioridad es el rescate de la deuda pública. El plan original consistía en alcanzar un acuerdo de reestructuración con los bonistas y el FMI antes del 31 de marzo. A la espera de esta renegociación, Martín Guzmán prorrogaba en diciembre el reperfilamiento de las letras en dólares bajo legislación local (es decir, sobre la que tiene jurisdicción para hacerlo sin entrar técnicamente en default), con la intención de canjearla luego en base a la reestructuración suscripta para los títulos bajo ley extranjera.

Para la deuda en pesos, mientras tanto, se propuso ir canjeando una parte de los vencimientos y pagando al contado el resto. Para lograrlo, tras el traspie con el Bono Dual AF20, el gobierno mejoró sustancialmente sus ofertas de canje tomando los títulos a valor nominal -es decir más que duplicando el precio al que cotizan



en el mercado. Con todo, ya gatilló más de 150.000 millones de pesos para cancelar vencimientos.

Ahora, en medio de la agudización de la crisis por la pandemia y del empantanamiento de la negociación con los bonistas de la deuda externa, el gobierno no descarta que las tratativas se alarguen y que hasta se extiendan durante todo el año sin alcanzar una reestructuración. Para despejar inquietudes, días atrás pagó 250 millones de dólares por vencimientos de bonos ley extranjera y dejó en claro que seguirán pagando con las reservas internacionales los 3.500 millones de dólares que vencen por este concepto en lo que queda de 2020. La capacidad de pago de Argentina no da para más que ello y por eso reperfila los pagos en dólares bajo ley local.

Hay quienes señalan que la medida tendría el guiño de varios fondos de inversión que poseen bonos bajo jurisdicción extranjera, para quienes esta postergación les permite tener mejores chances de cobrar. Sin embargo, esto colisiona, a su vez, con las intenciones de otros fondos de inversión que poseen en sus carteras bonos bajo ambas jurisdicciones, los cuales podrían aprovechar este reperfilamiento para considerar que el gobierno ha caído el default y reclamar la aceleración de todos los pagos, incluidos los títulos bajo ley extranjera.

Más allá de estas disputas, el impasse de la renegociación de la deuda externa se agravó por la crisis desatada con el coronavirus, que agiganta el déficit fiscal y la contracción económica. Sumado a ello, el desplome de Brasil deteriora los términos de intercambio de Argentina con su mayor socio comercial y redobla las presiones en favor de nuevas devaluaciones del peso.

Los economistas, mientras tanto, observan con preocupación el veloz ensanchamiento de la base monetaria. El incremento se acerca a los 600.000 millones de pesos bajo el gobierno de Fernández, producto sobre todo del pago de Leliq y la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional para financiar el déficit fiscal. Por otra parte, la caída de los precios de las materias primas, como el petróleo y la soja, hirió el corazón del planteo de un repago de la deuda en base a un crecimiento en la generación de divisas. El hecho de que para evitar la paralización total de Vaca Muerta se baraje reducir las retencio-

nes que pagan los pulpos petroleros suma mayores interrogantes, porque eso achicaría aún más la recaudación de dólares.

Agreguemos que el decreto publicado ahora excluye del reperfilamiento a los títulos que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y del sector público, los cuales serán canjeados por nuevos títulos, como ya se viene haciendo, desvalorizando sus tenencias. Además, la resolución incorpora a la Anses en el decreto que establece la obligación de todos los organismos públicos de invertir su liquidez en letras del Tesoro. La operación de rescate de la deuda incluye así un agravamiento de la confiscación del sistema previsional, que en los últimos dos años vio cómo se desvalorizaban en un 50% las tenencias del FGS.

Aún en plena crisis sanitaria, los recursos del país están orientados a rescatar a los usureros internacionales. Es un intento que podría de todas maneras fracasar. Los fondos buitres, que especulan con resolver la cuestión en los tribunales de Nueva York, siguen revoloteando alrededor de los bonos argentinos, seducidos por el derrumbe de sus cotizaciones.

El rechazo a seguir pagando esta usura y la investigación de toda la deuda es el punto de partida elemental para afrontar la defensa de la salud y las condiciones de vida de los trabajadores, más aún en medio de la pandemia.

Iván Hirsch

Este martes, el gobernador Juan Schiaretti anunció que la provincia de Córdoba emitirá un bono de 9.000 millones de pesos para hacer frente a deudas, anteriores al 29 de febrero, con proveedores y contratistas del Estado. El bono se establece por 36 meses, pagará el interés de la tasa Badlar, tendrá un plazo de gracia de un año y se emitirá de manera digital. Desde el gobierno plantearon que la emisión servirá para ahorro o para "pagar impuestos" y será transferible, habilitando de esa forma su circulación como medio de pago.

Para restarle gravedad al asunto, tanto Schiaretti como el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, insistieron en que no constituía un bono, para lo cual tendría que llamar a licitación y ofrecer en el mercado donde el tomador tiene alguna clase de libertad para adquirirlo; acá se trata de un título de deuda que en forma más o menos compulsiva el gobierno le impone a sus proveedores y que solo pueden ser transferidos o usados para pagar obligaciones tributarias con la provincia.

Todavía no se envió el proyecto de ley correspondiente, pero todo

Schiaretti emite bonos (cuasimoneda) y anuncia que "no podrá" pagar sueldos

indica que se trataría lisa y llanamente de una cuasimoneda, puesto que los proveedores y contratistas estarían obligados a aceptarlo, o no cobrarían sus acreencias.

Pero la cosa no queda en los 9.000 millones de pesos que ahora se anuncian. Consultado el ministro sobre la posibilidad de emitir bonos para otros fines, por ejemplo el pago de salarios, como fueron los Cecor y Lecor, Giordano respondió: "todo depende de la involución de la situación y de la decisión que tome el gobierno nacional en su nivel de asistencia". En otra entrevista expresó: "comparando con un marzo normal, [la recaudación] fue de un cuarto menos. Y este marzo no refleja ni por cerca las consecuencias de la parálisis por la cuarentena. Abril va a ser peor" (*La Voz del Interior*, 7/4). Más claro, echarle agua. Si no hay un rescate del gobierno de Fernández en base a una emisión de pesos, que puede lle-

var a una hiperinflación, Schiaretti emitirá su propia cuasimoneda generalizada.

La semana pasada, el gobierno de Schiaretti anunció que procedería con un recortazo salarial que se extendería a un gran porcentaje de los trabajadores, el cual sería escalonado, recortando el 30% de los sueldos más altos y un menor porcentaje para los sueldos más bajos. Algunas versiones indican que el recorte llegaría hasta los haberes (bruto) de 60 mil pesos, afectando a trabajadores que perciben un haber de 45 mil pesos mensuales, apenas por encima del índice de pobreza en la provincia. Desde un primer momento denunciábamos que el gobierno se preparaba para descargar la crisis sobre los trabajadores.

Giordano ratifica esa denuncia. En la entrevista mencionada arriba, el ministro dice que no puede afirmar que los salarios de abril se paguen con normalidad y que el go-

bierno está analizando avanzar con la reforma previsional provincial para recortar los haberes de jubilados y pensionados, en base a un diferimiento de las actualizaciones de haberes, que en un cuadro hiperinflacionario pueden significar una enorme reducción salarial.

El colapso de la provincia, que precipita la pandemia del coronavirus, tiene un largo arrastre. Durante todo el período macrista, Schiaretti impulsó un endeudamiento exponencial en dólares. Esa deuda, que creció cerca de 1.000%, sirvió principalmente para financiar los grandes negociados de los capitalistas ligados a la obra pública, a la especulación financiera e inmobiliaria, y a la infraestructura al servicio de los patrones del "campo". Ahora cuando la provincia explota, Schiaretti quiere seguir defendiendo los mismos intereses con recortes y congelamiento salarial, pago en bonos y un nuevo ata-

que a las jubilaciones y pensiones.

En la reunión de Fernández con los gobernadores del martes a la noche, se anunció un ATN (aporte del Tesoro Nacional) de 60 mil millones de pesos, del cual Córdoba recibiría 5.200 millones en tres cuotas mensuales. También se dijo que habría un crédito por una suma igual. Desde el gobierno local recibieron los anuncios con mucha cautela, pero no garantizaron que van a pagar, como tampoco que no vayan a emitir bonos. La presión sobre el salario se profundizará en los próximos días.

Cada día se hace más vigente la consigna del Frente de Izquierda: que la crisis la paguen los capitalistas. Elaboremos las y los trabajadores un programa único y marchemos a la lucha: abajo el ajuste a los trabajadores, no pago de la deuda usuraria, no al recortazo salarial y al pago en bonos, salario básico inicial de 40 mil pesos y cláusula gatillo, 82% móvil para los jubilados y defensa de la caja provincial, así como impuestos progresivos al gran capital.

Jorge Navarro



La cuarentena bajo fuego patronal

NÉSTOR PITROLA

El rey al desnudo

La pandemia arrecia en potencias europeas como Francia, Italia, España, el Reino Unido y en el corazón del capitalismo mundial, el estado de Nueva York. Los respiradores y las camas de terapia intensiva no alcanzan en Estados Unidos, donde el deterioro del sistema de salud fue justamente motivo de debate en la última década: otro tanto ocurre en Italia o Francia.

En tanto, la OIT anticipa que los despidos serán muchos más de los 25 millones previstos inicialmente, puesto que “el 81% de los 3.000 mil millones de trabajadores de la fuerza laboral mundial están afectados por el derrumbe de la actividad económica, mientras ya se han perdido horas equivalentes a 195 millones de trabajadores”.

La economista Carmen Reinhart de Harvard, publicó en *The Wall Street Journal* que “veremos una lluvia de quiebras y de defaults a pesar de la liquidez que se inyecte. Esta crisis es solo comparable al crack del '29 y no esperen que China crezca al 6% en los próximos años. La fuga de capitales de los emergentes se acentuará”.

En estas breves líneas se aprecia que resultó acertada la caracterización de *Prensa Obrera* desde fines de febrero en el sentido de que el coronavirus aplicado a la crisis capitalista preexistente iría hacia una depresión mundial, a crisis de deudas y quiebras con su secuela de despidos masivos. A su vez, las guerras comerciales que caracterizan toda la situación previa acentúan hoy las rivalidades nacionales. Y la anarquía capitalista, no sólo fractura toda respuesta mundial, sino aún al interior de los Estados y en relación a cualquier ordenamiento racional de la economía para afrontar la guerra contra el virus. El reino capitalista está al desnudo.

El verdadero “Estado presente”

Cabe interrogarse en este cuadro si es oportuno jactarse -como se hace desde el poder, con sobreactuado disimulo-, del “modelo argentino”, que es mirado en el mundo por la “respuesta del Estado presente”. Lo cierto es que si se cumplen las promesas de ampliación de camas para enfermos graves, tendríamos el 25% de las que tiene el estado de Nueva York, con 20 millones de habitantes, menos de la mitad que la Argentina.

Hay aplausos emocionados de la población al personal de salud, pero se suceden los reclamos en los centros de atención por falta de insumos para evitar el contagio, ni hablemos de salarios, de horarios extendidos y precarización. La Legislatura de la Ciudad sesionó, pero no para atender uno solo de los proyectos que presentamos en ese sentido, sino para ampliar el permiso de endeudamiento al Ejecutivo de la Ciudad. La contracara de esa situación han sido las patéticas apariciones de Gerardo Morales cociendo barbijos caseros por televisión o

Larreta llamando a colocarse bufandas o cualquier otra cosa, ante lo que prevén: la salida más o menos inminente de la cuarentena. Han sido incapaces de poner la industria textil a fabricar masivamente barbijos para el personal de salud, que debe rotarlos permanentemente, y para la población que esté obligada a salir a trabajar.

La realidad ha ido mostrando que la cuarentena precoz ha sido la respuesta de un régimen que teme una catástrofe sanitaria y social a la ecuatoriana, en el país de un 25% de desocupados y subocupados y de un 40% de trabajadores en negro y muchos más precarizados. Cuyo sistema de salud, además, está colapsado. Esa realidad social tuvo un retrato cuando un millón de jubilados se agolparon en los bancos para cobrar haberes atrasados en medio de la cuarentena. Las consecuencias de semejante golpe al aislamiento no se saben aún, porque además no está claro el alcance de la circulación local del virus, puesto que los test que se hacen son mínimos hasta ahora. Una vez más, por cuestiones de presupuesto y falta de inversión en salud.

El “gobierno nacional y popular” mostró sus límites insalvables cuando rechazó la propuesta de Ginés González de articular todo el sistema de salud en un solo comando. El lobby privado de la salud y la burocracia sindical asociada a él mostraron que mandan.

Los sobrepagos escandalosos de Arroyo y sus funcionarios vinieron a clarificar otro costado del Estado “presente”, el Estado socio de los negociados, la corrupción y la especulación de los formadores de precios. El propio Presidente criticó que las empresas (todas creadas para proveer al Estado) se “plantaron”, como excusa, cuando el Estado debería comprar a los fabricantes y no a dudosos intermediarios y abrir los libros de los formadores de precios, no rendirse cuando se “plantan”.

Salida caótica de la cuarentena

Si el Presidente no usó sus superpoderes contra el lobby privado de la salud, tampoco los usó contra Paolo Rocca, que impuso sus 1.450 despidos homologados en la sede del Ministerio de Trabajo. La ola de despidos y suspensiones de las patronales ha desnudado también el carácter inservible del decreto de prohibición de despidos por 60 días. Dánica ha llegado al colmo de despedir trabajadores por negarse a hacer horas extras en medio de la pandemia, cuando los turnos deberían reducirse. El frigorífico quilmeño Penta directamente despidió 240 operarios, al igual que la curtiembre Sadesa, de Galperín, lo mismo que la minera Livint o la metalúrgica Mirgor de Río Grande. Incluso el Estado provincial de Kicillof ha despedido falsos monotributistas en Educación y la orquesta de José C. Paz fue censanteada en masa por Mario Ishii.

Otra variedad es la de Mascardi, que avisó que no paga los salarios porque “los em-

pleados administrativos están en sus casas”. Las cadenas de comidas rápidas recortaron el 50% de los salarios de sus 25 mil empleados, que siguen laburando; Aluar anticipó que no pagará salarios completos y ACC Group agravó el conflicto en su call center porque suspende sin goce de sueldo alguno.

En este escenario, la UIA, apoyada por la burocracia sindical de la CGT, fue a presionar por el levantamiento de la cuarentena. La pose inflexible de Alberto Fernández, sin embargo, ha producido ya dos decretos de exclusión del aislamiento social para nuevas actividades y se viene el tercero, el domingo 12 de abril. Si hoy funciona el 40% del PBI, van por mucho más. Ya se han habilitado actividades de dudosa esencialidad como la exportación e importación, corralones, curtiembres, aserraderos, colchones, maquinaria vial y mutuales de crédito, entre otras.

La explosividad sanitaria de este levantamiento caótico bajo presión patronal requerirá que los trabajadores se organicen para rechazar sectores no esenciales, para medidas de seguridad y elementos sanitarios, porque el atropello patronal está ya mismo a la orden del día. La disyuntiva salud o economía es un enfoque para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, que pagarán con privaciones y con muertes.

Siguen pagando la deuda

El decreto que reperfila unos 10.000 millones de dólares pinta de cuerpo entero la política criminal oficial en materia de deuda. Ante todo porque pagaron hasta el 31 de marzo puntualmente todos los vencimientos, en pesos y en dólares, a pesar de las dramáticas necesidades para la salud y para garantizar los ingresos de toda la población trabajadora. Lo han hecho a costa de una emisión desde que asumió el gobierno de por lo menos 150.000 millones de pesos sólo para el pago de deuda (el total emitido es mucho mayor), a costa de la caída de reservas y de nuevos endeudamientos.

El reperfilamiento exclusivo de los bonos de jurisdicción local levantó el precio en las bolsas de los bonos con jurisdicción extranjera, justamente los que más importan a Wall Street y al FMI. Esto porque aparece como una garantía de pago de los 3.500 millones de dólares que restan en esos bonos hasta fin de 2020, extenuando las reservas del Banco Central en medio de la pandemia. La medida legítima el pago de la deuda impagable.

Lo mismo vale para las provincias. Schiaretti honra su deuda externa pero pagaría a proveedores con bonos que constituyen una parcial emisión de cuasimonedas, una manera de rebajar los ingresos de la población, que los termina recibiendo como medios de pago al 80% de su valor o menos. Agreguemos que el gobernador cordobés ahora amenazó directamente con pagar salarios reducidos. Fernández, en la reunión con todos los gobernadores, ha prometido fondos de una recaudación que está a me-

nos del 40% de la prevista, para evitar que el incendio de los patacones se propague por todo el país. Veremos.

Al mismo tiempo se anuncia que los 10.000 pesos para los más carenciados, para los cuales se anotaron nada menos que 12 millones de argentinos, se pagarán entre la segunda quincena de abril y la primera semana de mayo. O sea que abarcarán tres meses de la emergencia, marzo, abril y mayo. Es una burla que lleva la tensión social del hambre a un extremo, mientras las organizaciones sociales denuncian que la ayuda alimentaria no llega. Ni ampliada, ni en tiempo y forma por “falta de logística”. Un absurdo, cuando las empresas de transporte tienen los camiones parados. Otro default de los superpoderes presidenciales.

Más que nunca

un programa para intervenir en la crisis

La vigencia de un programa de los trabajadores frente a la pandemia crece día a día.

Prohibir efectivamente los despidos hasta fin de año con garantía de estabilidad laboral para trabajadores formales e informales. Los 30.000 pesos para todos los trabajadores en negro, desocupados, monotributistas de categorías inferiores, cuenta-propistas y empleadas de casas de familia. Que el Estado garantice el salario integral de todos los trabajadores, abriendo los libros de las empresas y asistiendo directamente la nómina salarial o parte de ella según las necesidades. Actualización de los salarios por inflación mientras dure la emergencia, hasta la reanudación de paritarias. Que se garantice la continuidad de toda empresa que cierre, bajo control obrero. Proteger los fondos de la Anses y elevar la jubilación mínima a 30.000 pesos.

Anular unilateralmente todo pago de deuda, en pesos y en dólares, de jurisdicción nacional y extranjera, a excepción de los bonos en manos de la Anses, para atender las necesidades de la salud y la economía. Imponer un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas con el mismo objetivo.

Reorganizar la economía nacionalizando el petróleo, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos. Centralización del sistema de salud e intervención de todos los laboratorios para poner el conjunto del sistema al servicio de la lucha contra la pandemia en favor de toda la población sin distinción de su capacidad adquisitiva. Reconvertir las ramas industriales necesarias para la producción de barbijos, elementos de protección a la salud, respiradores y en general de todas las necesidades que plantea la emergencia. Elección de comités de trabajadores para hacer cumplir los reclamos en todos los lugares de trabajo que en forma total o parcial entren en operaciones.

La defensa de la vida es una sola, por la salud y contra el hambre, hay que pasar por arriba los obstáculos del lucro y la anarquía capitalista para afrontar la pandemia.

Dánica Llavallol, en lucha contra los despidos

El despido de cinco trabajadores en Dánica desató un paro total en la planta de Llavallol la semana pasada. La patronal argumenta que se trata de despidos "con causa", por lo que no estarían alcanzados por el limitado decreto de prohibición de despidos de Alberto Fernández. La patronal pretendía que las jornadas laborales alcancen las 12 horas, exponiendo por más tiempo a los trabajadores al contagio del Covid-19. Según la empresa, el rechazo a realizar horas extras es la causa de los despidos.

Tras los despidos y el paro como respuesta, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con los despedidos adentro, pero la empresa la desconoce. La patronal colgó un cartel en la puerta, anunciando el cierre hasta nuevo aviso. Hasta el momento no existe audiencia ni instancia de negociación; la empresa patea el tablero cerrando cualquier diálogo unilateralmente y decretando un lock-out en momentos donde la producción de Dánica es considerada esencial al ser parte del rubro alimenticio.

Los atropellos patronales son permanentes en esta planta de Llavallol, con despidos, ataques al salario y condiciones de trabajo, retiros voluntarios, cierre de un turno en producción y una

deuda salarial que se arrastra desde julio de 2019 al no reconocer el aumento del 25% de salario firmado en acuerdo paritario y que ya acumula unos 200 mil pesos por trabajador, aproximadamente. Tampoco se pagó el bono de fin de año de 52 mil pesos.

Pasado el plazo para que se depositen los salarios de la quincena de marzo, la empresa ha retenido el sueldo de la mayoría de los trabajadores, pagando una parte de la quincena a un sector minoritario del personal. Frente a este nuevo atropello y una nueva medida contra los trabajadores y la cuarentena por parte del grupo Beltrán, debe plantearse, por un lado, que el gobierno provincial, que asegura haber colocado una multa de 3 millones de pesos a la parte empresaria, garantice los salarios de todos los trabajadores de Dánica y, por otra parte, que se abran los libros de la empresa para verificar sus ganancias y a dónde fue dirigido el dinero que les debe a los obreros desde julio del año pasado.

La fuerte lucha de los aceiteros de Dánica reclama de una acción del conjunto de la Federación Aceitera, por la reincorporación de los cinco compañeros y por todas las reivindicaciones, deuda salarial, bono y condiciones de trabajo.

Emiliano Bonfiglio

Un debate apasionante e importantes resoluciones

Se reunió la Coordinadora Sindical Clasista

Se realizó una reunión ampliada de la Coordinadora Sindical Clasista. Participaron casi 40 dirigentes sindicales -estatales, docentes, telefónicos, del Sutna, gráficos, docentes universitarios, metalúrgicos, textiles y papeleros- de numerosas provincias.

La reunión debatió la situación actual, los problemas y los reclamos en cada lugar de trabajo y gremio, apuntando a preparar la intervención de la Coordinadora en la nueva fase de la cuarentena.

Alberto Fernández se apresta a firmar la segunda ampliación de las actividades exentas de cumplir el parate, que ya son decenas y decenas. La proclamada priorización de la vida frente a la economía es un verso.

Las patronales, secundadas por las burocracias sindicales, exigen poner en marcha la producción, aunque nada tengan que ver con necesidades esenciales. Siderca y Morvillo son dos ejemplos de la fuerte presión patronal que enfrentamos los trabajadores. Solo los trabajadores pueden establecer qué producción es realmente esencial para la población. Las patronales, aún en la emergencia, buscan seguir con sus negocios. La dirigente de Textilana de Mar del Plata, denunció cómo la patronal confecciona barbijos de escasa capacidad de protección pero mantiene su comercialización de prendas por Mercado Libre.

Las empresas trasladan hacia abajo su crisis de facturación, mediante

despidos, suspensiones y rebajas de salarios; es una orientación general, que la supuesta prohibición de despidos decretada por el gobierno no solo no frenó sino que viabilizó. Esto ocurre también entre los trabajadores estatales o municipales: en Educación de La Plata, la orquesta de José C. Paz, los mineros del Turbio o los aceiteros de Dánica.

Numerosas empresas violan los protocolos de seguridad o no disponen de elementos de protección. Incluso en hospitales y centros de salud. Solo como ejemplo, un compañero de Neuquén relató que en los hospitales de Cutral Có y Zapala, epicentro de los contagios en esa provincia, se libra una lucha permanente contra el virus y contra la desidia oficial.

Lo único realmente en cuarentena es el salario. La CSC reafirmó su lucha por la defensa integral de los salarios, ajustados por cláusula gatillo contra la inflación, y el cumplimiento de los acuerdos paritarios que se desconocen (docentes universitarios).

Rechazamos la manipulación de las patronales de la situación de excepción para presionar a los trabajadores a aceptar mayor precarización laboral -distintas experiencias de teletrabajo en las telefónicas o los bancos. La rotación o reducción de turnos muchas veces es la forma de imponer una quita en los ingresos. Como en los supermercados o en la Salud impulsamos la reducción de jornada con igual salario.

Redoblamos nuestra campaña de solidaridad con los trabajadores de Mascardi, y con los trabajadores de Mc Donald's y otras empresas de Fatfood, en defensa de sus salarios. Apoyamos el reclamo del bono de 20 mil pesos de los trabajadores de Carrefour y otras cadenas.

Frente a las direcciones sindicales integradas al Estado la CSC ratifica su rechazo al pacto social propugnado por el gobierno, las patronales y la CGT-CTAs, que realizamos en el plenario del Sutna-Pilar poco después



de las Paso. Lejos de defender la salud y los ingresos de los trabajadores, los Daer, Acuña o Moyano se alinean con los reclamos de las patronales, incluyendo planes de salvataje y auxilio estatal.

Ante las rebajas salariales planteamos la apertura de los libros y que sea el Estado el que garantice el cobro integral de los ingresos, por la vía que corresponda (incluso en casos excepcionales mediante el pago directo del total o de parte de la nómina salarial), hasta que la recuperación

económica modifique esa situación.

Denunciamos la presencia del ejército en los barrios que prepara la militarización de los conflictos y luchas en ciernes. Una compañera docente de Chubut brindó un informe pormenorizado de la situación explosiva de esa provincia donde, junto al no pago de salarios, la represión es moneda corriente.

Luchamos por defender el aislamiento preventivo, con nuestro programa: el repudio a la deuda y la ruptura de los pactos con el FMI; la

nacionalización de la banca y los recursos energéticos; un impuesto progresivo a las grandes fortunas; una verdadera prohibición de despidos y suspensiones; la defensa integral del salario y la intervención de los trabajadores mediante comités de base para ejercer un "control obrero" de la cuarentena, en fábricas y oficinas.

Denunciamos que los 10 mil pesos de ayuda a los trabajadores sin ingresos regulares son una estafa ya que, además de insuficientes, recién se cobrarán a mediados de abril o principios de mayo. Nos planteamos reforzar nuestra campaña por universalizar un seguro al parado de 30 mil pesos.

Resolvimos convocar plenarios de todas las agrupaciones de la CSC e impulsar una intensa difusión de nuestras declaraciones, artículos y comunicados, entre los trabajadores. La reunión constató una ola de reclamos obreros y populares que empiezan a abonar un campo de luchas, en el presente y sobre todo futuras.

La intervención decidida de la CSC debe servir para canalizar las denuncias, hacerlas públicas, llevar la solidaridad efectiva a cada lucha y para organizar a nuevas camadas de obreros y jóvenes que, en estas condiciones difíciles, buscan un camino para defender su salud, sus puestos de trabajo y sus condiciones de vida, amenazados por la catástrofe capitalista.

Daniel Sierra-Miguel Bravetti

El gobierno lanzó el programa explicando que abarcaría a unas 3,6 millones de personas. Ante el aluvión de 12 millones han empezado a llover las denuncias de exclusiones arbitrarias y totalmente fuera de toda lógica. Desocupados que hace más de seis meses que no trabajan en blanco aparecen rechazados por aportes, trabajadores preinscriptos correctamente son rechazados en la segunda etapa del trámite sin explicación y sin lugar a reclamos. La página de la Anses está totalmente colapsada y los posibles beneficiarios no encuentran respuesta. Alejandro Vanoli, el titular de la misma, implicado en el abandono criminal aplicado el viernes contra los jubilados y beneficiarios de la AUH, se prepara para protagonizar una nueva agresión al pueblo en el contexto de la cuarentena.

Cuando se trata de resolver los problemas de las patronales, el gobierno actúa con premura, como lo es el caso de la homologación de 1.450 despidos de Techint en medio de una conciliación obligatoria. Pero, cuando los afectados son

los trabajadores y desocupados, se dilatan los plazos, se niega la asistencia, se bloquean los beneficios y hasta se montan grandes negocios sobre la pobreza y las necesidades populares. Reclamamos que se constituya una comisión investigadora, con las organizaciones sociales y los trabajadores del Estado, que investigue y denuncie a los responsables. Esta comisión debe contar con amplios poderes para abrir los libros del Estado y las empresas que le venden a este.

Paralelamente, reclamamos la constitución de un comité de control y seguimiento de las futuras compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, la Secretaría de Comercio y de las organizaciones sociales. Así como el cumplimiento de la entrega de los alimentos e insumos sanitarios en tiempo y fecha, y el reforzamiento de todas las partidas para hacer frente a la cuarentena.

Eduardo Belliboni

BUENOS AIRES

Reincorporan a 42 trabajadores de Vialidad

El martes, el cuerpo de delegados de base de ATE fue comunicado sobre la reincorporación de los 42 compañeros despedidos de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no hay precisiones sobre cuándo se harán efectivas, su duración ni el monto de los contratos.

El anuncio llega después de que los trabajadores enviaran un pedido al Consejo Directivo Provincial de ATE para que exijan una audiencia con la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, el 10 de marzo.

La campaña en común con la consigna "Todxs adentro, recontractación ya y ningún despido en la DGCyE y Vialidad" cobró una importante visibilidad y recogió cientos de fotos y pronunciamientos en apoyo. La exigencia al gobernador Axel Kicillof fue concreta: que se incluya a los despedidos a la continuidad laboral para los miles de precarizados de la provincia.

El papel jugado por todas las variantes de la burocracia sindical del sector fue ilustrativo. La Asociación del Personal de Vialidad, enrolados con las 62 Organizaciones de la CGT, negó la existencia de despidos y rechazó su apoyo a los trabajadores desde el inicio. Por su parte, los delegados de UPCN se limitaron a una mínima presencia en las asambleas y a promesas de llevar el reclamo a las reuniones paritarias, sin ningún efecto.

La conducción provincial de ATE intentó desarmar el conflicto, contraponiendo su "método dialoguista" para ausentarse de las manifestaciones; rechazó la exigencia de los trabajadores de

paro provincial y continúa encubriendo los despidos de Kicillof, como anunció Oscar De Isasi (secretario general del sindicato) luego de la audiencia con la ministra Malec, en la cual solicitaron la continuidad de los trabajadores en Educación, cuando hace cuatro meses que los trabajadores luchan por recuperar sus puestos de trabajo.

Con el método de la asamblea y plan de lucha, los trabajadores, con el cuerpo de delegados y con las juntas internas combativas, pudieron enfrentar este ataque del Estado y arrancaron la reincorporación de los 42 compañeros.

Está planteado exigir que se efectiven las reincorporaciones ya, el cobro retroactivo a la fecha de los despidos y la actualización salarial otorgada al resto de los precarizados de la provincia, con la perspectiva del pase a planta permanente para terminar con la precarización.

La importancia del logro vale doble, ya que mantuvieron la organización y la denuncia aún con el aislamiento obligatorio por el Covid-19, y marca un camino para impulsar una nueva etapa de la lucha de los despedidos de Educación para lograr sus reincorporaciones.

Desde Tribuna Estatal y la Junta Interna de ATE Educación iremos a fondo en la lucha para terminar con los despidos del gobierno de Kicillof, como lo hemos hecho con los despidos de Scioli y Vidal, para ratificar que la única lucha que se pierde, es la que se abandona.

Nacho de la Vega



En los últimos días se desató un escándalo vinculado con los sobrepuestos de hasta un 100% de los alimentos que el Estado compra para la atención de las personas en emergencia alimentaria y que son asistidas por los comedores populares. Esta crisis en la cartera de Desarrollo Social se llevó puestos a 15 funcionarios, entre ellos a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, un hombre ligado a los intendentes del conurbano bonaerense. En un país con 16 millones de pobres, el tema no es solo un problema de corrupción.

Los hechos denunciados fueron reconocidos por el propio ministro Daniel Arroyo y justificados por el "apuro" y en que los empresarios "se le plantaron". Si el gobierno se amilana ante las presiones de un grupo de empresas, ¿qué le queda entonces a los trabajadores que se ven obligados a pagar lo que las góndolas dictaminan? Pero el problema es de otro orden: los sobrepuestos, la cartelización y la corrupción de funcionarios del Estado no son ninguna novedad. Estas características han

Los sobrepuestos, la urgencia y el hambre

Tras el escándalo se retiran 15 funcionarios de la cartera de Desarrollo Social

recorrido todos los gobiernos, desde el "Abuelo" Cafierito, que según Juan Domingo Perón se quedaba con los vueltos, hasta el contrabando de armas a Ecuador de Menem, las coimas en el Senado de la Alianza y el blanqueo de los parientes de Macri, por nombrar solo algunos incidentes recordados. Los sucesivos gobiernos no tienen ningún reparo en hacer sus negocios a costa del hambre y las necesidades populares.

Con sobrepuestos de un 100% no hay dudas de que la corrupción está presente en algún o todos los estamentos estatales que ejecutan, controlan y aprueban semejante desfalco. Si se gasta mal y sale el doble, se podría dar el doble de asistencia con solo ahorrarnos el robo. Sin embargo, el gobierno no

cumple ni con lo indispensable.

Antes de la declaración de la cuarentena, el Estado compraba 8 millones de kilos de alimentos, en su mayoría hidratos de carbono, que eran distribuidos para comedores populares en todo el país.

A pesar de que Arroyo ha declarado una y otra vez, en todos los medios de comunicación, que la ayuda alimenticia es una prioridad de su gestión, la realidad es muy diferente. El actual gobierno, igual que el anterior, incumple la ley de Emergencia Alimentaria sancionada, luego de un acampe nacional de 48 horas, en septiembre de 2019.

La ley obliga al Estado a aumentar un 50% los alimentos destinados a los comedores populares. En los últimos seis meses solo se han

entregado las partidas correspondientes a cuatro meses, dos en cada período de los sucesivos gobiernos. Mauricio Macri y Alberto Fernández comparten la violación de la emergencia alimentaria.

El hilo de las responsabilidades

Las responsabilidades de este escándalo no solo afectan al gobierno sino que la corrupción es también del que vende. Los grandes empresarios alimentarios saben muy bien que el precio al que le venden al Estado es un robo. Sin embargo, ven en esta crisis una oportunidad para enriquecerse en forma ilegal y violando hasta las normas más elementales. Deben ir presos, tanto empresarios como funcionarios.

Solo en los listados de espera de



los comedores del Polo Obrero se han inscripto en tres días más de 17 mil trabajadores desocupados, que reclaman ayuda alimentaria, y más de 80 mil se inscribieron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

IFE: otro frente de tormenta

Por otro lado, el gobierno lanzó el programa IFE: un subsidio ultralimitado de 10.000 pesos, al que sin embargo se han preinscripto 12 millones de personas. Esto habla por sí solo del enorme cataclismo social que nos envuelve.

Frente a la inviabilidad de la virtualización, la UBA reprograma el cuatrimestre

Luego de haber postergado el inicio de las clases o de haberlas suspendido en aquellas facultades que ya habían comenzado, el viernes pasado el rector de la UBA resolvió una nueva postergación del cuatrimestre hasta el 1° de junio. La decisión fue adoptada a partir de una resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias (del Ministerio de Educación de la Nación) en función del hundimiento de la virtualización forzosa que se había intentado.

En la resolución, luego de varios considerandos citando la anterior disposición del Rectorado y distintos artículos de decretos presidenciales, reconocen que “es necesario fijar un nuevo calendario académico para preservar la calidad de la enseñanza”.

Horas antes, ante el total naufragio de las aventuras virtuales en la mayoría de las unidades académicas y de las presiones descargadas sobre los trabajadores docentes, la Agrupación Naranja de docentes universitarios e investigadores sostenía en una declaración nacional que “ante la pandemia: se impone una reprogramación del calendario académico”.

No fuimos visionarios, sino que recogimos el sentir de docentes universitarios y preuniversitarios, que rechazan la virtualización forzosa e improvisada de programas y contenidos, cuando además un sinnúmero de asignaturas de carácter práctico -fundamentales para la formación- quedaban sin posibilidad de dictarse.

En estos días de ensayo virtual vimos la total desconsideración que mostraban los coordinadores respecto de la situación de docentes y estudiantes en un cuadro de aislamiento social de casi 15 días, en muchos casos a cargo de niños o adultos mayores, y con toda la problemática ambiental y psicológica que trae días y días de encierro de toda la familia, en el marco de una pandemia que crece día a día en la cantidad de víctimas. Intentaron imponer una exigencia, por supuesto improvisada, de conversión de clases presenciales en virtuales con docentes que no fueron capacitados para la tarea y sin saber las posibilidades de equipamiento ni de docentes ni estudiantes.

Lo que no era imprevisible -por el bajo presupuesto que los gobier-



nos destinan a las universidades nacionales- fueron los límites que surgieron en muchas unidades académicas para sostener la pretendida virtualidad, algo que las autoridades de la UBA sabían. Campus que no alcanzan, conexiones que se caen, cargas que desaparecen porque el sistema no las aguanta. Por eso mismo en algunas facultades, y en función de mantener el cuatrimestre “a como dé lugar”, se comenzó a recomendar a los docentes que solo enviaran audios o videos de diez minutos, o que subieran poco material por la limitada capacidad del sistema.

En este cuadro, finalmente las autoridades, en su resolución del 3 de abril, reconocen lo que desde la Agrupación Naranja, la AGD-UBA y la mayoría de los sindicatos de la Conadu Histórica venimos planteando: no había condiciones de ningún tipo para sostener el cuatrimestre y la virtualización forzosa que buscaban algunos decanos/as. La salida que planteaban a esta crisis conducía a más precariedad educativa, laboral, de las condiciones de vida de docentes y estudiantes, mayor deserción y fracaso educativo.

No puede quedar sin mencionar la actuación de algunas agrupaciones estudiantiles, con La Cámpora y la Franja Morada (EDI) a la cabeza, que actuaron directamente como voceras y decanas, defendiendo sin miramientos que el cuatrimestre debía dictarse. Llegaron incluso a “apretar” en redes a profesores para que colaborasen con las gestiones y a convocar a estudiantes a presionar a sus docentes. Demuestran así la nula sensibilidad social frente a los padecimientos de la población ante la crisis sanitaria. Se ocuparon de defender el cronograma cuatri-

mestral en lugar de ver cómo con los docentes discutíamos juntos para que toda la UBA y sus recursos se pusieran a disposición de las necesidades de la población frente a la pandemia: la orquesta del Titanic tocando mientras el transatlántico se hunde.

Muy similar actitud tuvieron las burocracias sindicales. Luego de aceptar el desconocimiento de la cláusula gatillo firmada en 2019, se preocuparon ahora de dar consejos para atravesar en mejores condiciones el aumento de la carga laboral. Conadu, la federación conducida por los K, envió consejos, por ejemplo, del tipo de silla adecuada para soportar tantas horas en una computadora. Un accionar digno de un vocero patronal.

Como sucedió con las postergaciones y rearmes anteriores, el nuevo cronograma (1° de junio de 2020 al 12 de marzo de 2021, con receso del 19 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021) no ha sido discutido con las organizaciones de los trabajadores de la UBA. Esto, sumado a la adecuación que deberá hacer cada unidad académica entre el diseño ya planteado para el cuatrimestre y la resolución del rector Alberto Barbieri, demandará la intervención de AGD-UBA y sus comisiones internas, en el marco de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo. En esta brutal crisis sanitaria, la defensa de los derechos que como trabajadores tenemos los docentes universitarios y preuniversitarios, los no docentes y los estudiantes, y la puesta de todos los conocimientos y producción de nuestra universidad al servicio de las necesidades de la población, constituyen la tarea inmediata.

Ileana Celotto,
secretaria general AGD-UBA

El Rectorado confiesa el fracaso virtual y decreta un “sálvese quien pueda”

El pasado viernes, el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires informó el corrimiento del calendario académico (del 1/6 al 12/3/21), pero habilitó, en la misma resolución, que las materias que ya habían arrancado de forma virtual sigan su rumbo hasta junio. De esta forma, el rector Alberto Barbieri decreta un “sálvese quien pueda”, que pone arriba de la mesa problemas de fondo.

A confesión de parte...

Con su resolución, el Rectorado admite que la universidad no está preparada y no podría avanzar en la “virtualización” de manera integral. Las condiciones de ajuste y ahogo presupuestario de los últimos años alejan a las facultades de tener las condiciones para hacerlo: hoy en día, la UBA funciona con el presupuesto del año pasado, luego de un 55% de inflación. Esto explica por qué la universidad apenas tiene servidores precarios que colapsan simplemente con una inscripción (Siu Guarani).

No obstante, el problema no es solamente falta de equipamiento o déficit en cuestiones técnicas. La virtualización también encontró un rechazo masivo en la docencia, por la precarización y el aumento de la jornada laboral que produce. Además, hoy el Rectorado lejos está de garantizar los recursos para que todos los estudiantes y docentes tengan el equipamiento pertinente (computadoras, Wi-Fi). Las autoridades lo confiesan. No hace faltar relevar muchas más pruebas.

Los K y la Franja, al rescate del naufragio

La confesión del Rectorado deja en off-side también a algunas agrupaciones estudiantiles. Tanto el kirchnerismo (La Cámpora, La Mella) como las agrupaciones radicales (Franja Morada, Nuevo Espacio) salieron a coro a pedir que se dicten clases virtuales, sosteniendo que el único problema era pedir la “liberación de datos” de las empresas telefónicas.

A su vez, en algunas facultades como Exactas (Cámpora-Identidad) y en Psicología (EDI) salieron como fuerza de choque a “apretar” cátedras y docentes para que se den clases virtuales. Es una lavada de cara al Rectorado y las gestiones, y un desprecio y ataque a las problemáticas docentes. La independencia política es una/la clave de la etapa para hacer frente a las luchas que la juventud tiene por delante.

Virtualización forzosa y calendario inconsulto

Es contradictoria, a su vez, la resolución del Rectorado al establecer un cambio en el calendario académico

pero dejando a elección de las facultades la posibilidad de continuar con la “virtualización forzosa” que, donde se lleve a cabo, traerá exclusión de la cursada, devaluación de la enseñanza y precarización laboral. Esta situación expresa que las autoridades no pueden garantizar condiciones igualitarias para todos los estudiantes y docentes y, por lo tanto, cada unidad académica obrará según los “recursos propios” -obtenido según el mayor o menor nivel de privatización.

A su vez, el corrimiento del calendario académico no fue discutido ni con los gremios docentes ni con las federaciones ni centros de estudiantes. Ello presenta algunas incongruencias: ¿los docentes tendrán que dar clases durante tres cuatrimestres seguidos? ¿Qué pasará con las fechas de finales previstas para mayo y junio? ¿Cómo se desarrollarán las instancias de evaluación y cómo se garantizará que nadie se quede afuera de ninguna cursada? Por ahora, estas preguntas no tienen respuesta.

La vuelta a clases, si es que se da el 1° de junio, nos plantea la pelea por un aumento presupuestario para equipar a las facultades de jabón, alcohol en gel y todas las condiciones de salubridad e higiene necesarias para la cursada.

¿Qué proponemos?

Desde la UJS entendemos que es fundamental que estudiantes y docentes abramos una deliberación y un debate sobre cómo defender la universidad. En ese sentido, proponemos:

-Que el Rectorado y las gestiones convoquen a las gremiales docentes y estudiantiles para que el corrimiento del calendario académico sea consensuado.

-Defensa del salario y el convenio colectivo docente. Pago completo de la cláusula gatillo y de todas las horas (presenciales y virtuales) de trabajo. Garantía del equipamiento y los elementos necesarios para dar las clases correspondientes para estudiantes y docentes. Rechazo de plano a cualquier tipo de aprietes para que los docentes den clases virtuales.

-Aumento a 10.000 pesos de la beca Progresar. Garantía de las fechas de final que se vean postergadas por esta situación, y que nadie quede afuera de la regularidad en este contexto.

-Aumento presupuestario; no a la extensión del Presupuesto 2019. Garantía de las condiciones de salubridad e higiene para la vuelta a clases.

La versión completa de este artículo está disponible en <https://prensaobrera.com/universidad/68711>

Santi Nuñez

Colapso del sistema bancario: la responsabilidad es del gobierno y los banqueros

El gobierno dispuso la reapertura de sucursales a partir del viernes 3 de abril para el cobro de las jubilaciones y las AUH (Asignación Universal por Hijo) adeudadas de marzo. Esta apertura improvisada provocó un desastre. Filas interminables, sin respetar las condiciones de higiene y distanciamiento estipulados, expusieron al sector más vulnerable al riesgo de un contagio masivo.

Luego de eso, tanto los jubilados como los trabajadores bancarios nos enteramos, por los medios de comunicación, de la resolución del Banco Central de mantener las sucursales abiertas sábado y domingo, con extensión horaria. Tras esto, el lunes 6, mediante una comunicación del BCRA, se notificó de la apertura de las sucursales para todas las operaciones a partir del lunes 13. Además, se fijó la extensión de dos horas de la jornada horaria hasta el 17 de abril. La flexibilización del aislamiento (y laboral) se produce en el marco de la presión ejercida por la central empresaria y por la jefatura de la burocracia sindical.

El gobierno y las patronales son los responsables de la negligencia de la que fuimos testigos todos el viernes 3. No organizaron un cronograma de cobro escalonado para minimizar la circulación y la exposición, teniendo como antecedente lo ocurrido unos días antes con las filas en los cajeros. Tampoco abren el sistema para que las jubilaciones se puedan cobrar en todos los bancos. En su mayoría son bancos públicos los que realizan esta operatoria, porque los privados no muestran interés en lo que para ellos es una cartera o segmento de clientes poco rentable. Los bancos deben ser un servicio social y no un instrumento de la especulación financiera.

Los chivos expiatorios del desastre resultamos ser los trabajadores bancarios, que pagamos con nuestra salud los desastrosos oficiales. La solución que ofreció el gobierno fue obligar a los bancarios a trabajar sábado y domingo, con una recarga de horas sin pago adicional ni francos compensatorios. El titular del BCRA, Miguel Pesce, reconoció que tienen "en estudio" habilitar un conjunto de trámites reclamados por las empresas, dejando a las claras las presiones de los grupos empresarios.

La Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, ha demostrado toda su impotencia para defender los intereses de los trabajadores y de la población, ante la presión de las patronales para retomar sus negocios a expensas de la salud pública.

Luego del último comunicado del

BCRA, el sindicato solicitó una reunión al Ministerio de Trabajo para establecer los requisitos sanitarios necesarios para retomar la operatividad de las entidades. La respuesta del ministro Claudio Moroni fue que derivarían las presentaciones al titular del BCRA y de la Anses, sin dar ningún otro tipo de garantía sobre el control sanitario.

¿Cuál es la salida?

La inminencia del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (hubo doce millones de solicitantes!) puede hacer volar todo por el aire si no se toman medidas urgentes. Algunas sencillas, como la imposición a todos los bancos privados de incluir el pago de la seguridad social. Proveer tarjetas sin costo y sancionar a las entidades que las retengan. Poner en marcha campañas de inclusión y asistencia a todos los usuarios de los servicios financieros y habilitar cajeros móviles en los barrios para descomprimir la demanda presencial.

Hay que poner en pie comisiones de control de trabajadores bancarios, para verificar el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad dentro de las sucursales y sus adyacencias (comisiones con participación de delegados de base, entendiendo que en la mayoría de los bancos, Recursos Humanos y gremiales trabajan con una finalidad común, la ganancia de los banqueros a costa de los trabajadores). Incorporación de personal faltante, reducción de la jornada sin afectar el salario armando turnos para ampliar los horarios de atención. Plus salarial para todos los bancarios, eximido de ganancias y otorgamiento de francos compensatorios.

El sindicato también propone un protocolo de seguridad e higiene, que aún no está aprobado. Pero en el mismo se omiten cuestiones fundamentales, como que los comités sean mixtos, compuestos por delegados de base y comisiones internas.

Las medidas mínimas que proponemos solo sirven para enfrentar la situación de crisis de los próximos días. La solución de fondo es que todo el sistema bancario y financiero pase a estar controlado por el Estado. Los propios trabajadores bancarios tienen los conocimientos específicos para garantizar la continuidad en mucho mejores condiciones.

La crisis actual reclama medidas de fondo. Es nuestra vida o las ganancias de los empresarios.

Tribuna Bancaria



Un planteo continental frente al coronavirus y la crisis capitalista

La declaración conjunta de organizaciones de Argentina, Brasil, Chile y Perú

El Partido Obrero, Luta Pelo Socialismo de Brasil, la Fuerza 18 de Octubre y el Grupo Vilcapaza de Perú han emitido una declaración conjunta titulada "La Latinoamérica obrera y campesina debe ponerse de pie". Esta presenta un programa frente a los estragos del coronavirus y ofrece una caracterización de la situación política y económica de "uno de los continentes más vulnerables para poder enfrentar las consecuencias de la pandemia".

En primer lugar, el texto denuncia que "la orientación capitalista de los gobiernos latinoamericanos es lo que los ha llevado a demorar, o ni siquiera tomar, las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus". Esto se pone de manifiesto en el desfinanciamiento de los sistemas de salud, que ha llevado a situaciones extremas como la de los cadáveres pudriéndose en las calles de Guayaquil, Ecuador.

A su vez, la declaración explica que "la crisis capitalista mundial, que ya se venía desarrollando en el continente, está agravando el cuadro de la situación. Las economías nacionales sufren el desplome de los precios de las materias primas (cobre, soja, etc.), la caída de las exportaciones, las devaluaciones monetarias y las fugas de capitales (...) El parate de la economía amenaza no ya solo con una recesión, sino con una depresión mundial". Uno de los ejemplos de la crisis es el hundimiento de la Bolsa en Brasil, que tuvo (enero-marzo) el peor trimestre de su historia (*Folha de São Paulo*, 1/4). El real se devaluó casi un 37% en lo que va del año.

"La pandemia -dice la decla-

ción- ha puesto al rojo vivo la incompatibilidad que existe entre una organización social basada en el lucro capitalista y las necesidades sociales, la salud y la vida de los trabajadores y del conjunto de la población, lo cual coloca dramáticamente a la orden del día la necesidad de un reorganización integral de la sociedad sobre nuevas bases sociales, a escala continental y planetaria".

Crisis políticas

El texto da cuenta también de la agudización de los choques políticos y sociales. "Todas las contradicciones sociales, que antes del desembarco del coronavirus en América Latina desataron enormes rebeliones populares, lejos de borrarse, se están agravando sensiblemente".

En el documento se examina la crisis política en Brasil, donde el pésimo manejo de la pandemia ha agudizado la crisis del gobierno de Bolsonaro, sumido en una profunda crisis interna. En los últimos días, los diarios señalaron reuniones informales de las Fuerzas Armadas con el vicepresidente Hamilton Mourão, ante una posible destitución del mandatario. Pero también se ha agravado la crisis política en Ecuador. Y, en mayor o menor medida, todos los países sienten el impacto.

El imperialismo, en tanto, ha aprovechado la crisis para acentuar sus ataques contra Venezuela, con el enésimo llamado a una salida de Maduro y el despliegue de buques y tropas frente a las costas del país hermano. Los bloqueos contra Cuba y Venezuela muestran su naturaleza criminal a la luz de la crisis actual, dificultando el acceso de la población a

medicinas y productos de primera necesidad.

El documento denuncia también la instrumentación de las cuarentenas para reforzar el aparato represivo del Estado. En Perú, por ejemplo, se ha aprobado una ley que ampara a las fuerzas policiales ante el uso de armas, al estilo de la "doctrina Chocobar" de la ex ministra Patricia Bullrich en Argentina.

El texto ofrece una batería de reivindicaciones frente a la pandemia que incluye la cuarentena en todas las actividades no esenciales, la prohibición de despidos, la triplicación del presupuesto de salud, la centralización de todo el sistema sanitario (hospitales públicos, privados, obras sociales, laboratorios) bajo control de trabajadores y profesionales del sector, la nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, y el no pago de la deuda externa. Y llama a impulsar congresos de delegados con mandatos de base "como método para superar la entrega de las burocracias sindicales integradas de una u otra forma al Estado".

El coronavirus, con su monumental impacto político, económico y social en la región, reactualiza el planteo de una conferencia latinoamericana de la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero combativo, como la que han acordado los partidos que integran el Frente de Izquierda-Unidad. Si bien la pandemia dificulta actualmente su realización, está planteado continuar su preparación por todos los medios posibles para llevarla adelante una vez que las condiciones lo permitan.

Redacción

Europa, entre la pandemia y la crisis capitalista

Con más de 30.000 muertos por el coronavirus, Europa se prepara para un golpe económico sin precedentes. La contracción de la economía experimentada durante la crisis desatada en 2008 empalidece frente a las cifras que se barajan en el momento actual.

Se calcula una caída trimestral superior al 30% y anual de la Eurozona que oscila entre un 10% en las hipótesis más optimistas hasta el 20% anual. Sólo una cuarta parte de la masa laboral está trabajando y también solo una cuarta parte de la industria no cerró la puerta.

Algunos creen que en solo este trimestre el desempleo europeo saltará de 7,5 millones de personas a más de 10,5 millones. Esos tres millones no incluyen a los otros millones de trabajadores informales y precarizados que han perdido su trabajo. Casi un millón de británicos pidieron el subsidio de desempleo en las últimas dos semanas.

Rescate inviable

Los planes de estímulo puestos en marcha por los Estados son sensiblemente superiores a los de 2008, pero lo que se encubre es que solo una parte reducida va dirigida a paliar las necesidades apremiantes de la población. La realidad es que el dinero que se transfiere a los trabajadores es mínimo en comparación con el que se destina a las grandes empresas. Por ejemplo, el paquete del Reino Unido contempla evitar despidos mediante un pago del 80% de los salarios para empleados y autónomos afectados por la interrupción de su actividad por el coronavirus durante tres meses. Pero, en realidad, no es mayor que la proporción usual de beneficios por desempleo que conceden muchos gobiernos en Europa. El Reino Unido tenía un monto de subsidios por desempleo muy bajo (entre 400 y 500 dólares), que ahora se eleva al promedio europeo, pero sólo por unos pocos meses a lo que se agrega el hecho de que millones de trabajadores no calificarían para tener acceso a los mismos.

De un modo general, esto se reproduce en otras naciones del viejo continente. El auxilio para la población afectada es acotado en el tiempo y, a menudo, sus beneficiarios pueden tardar semanas, y hasta meses, en recibir ese dinero.

Estos paquetes no sólo auguran penurias inauditas para las masas sino que ni siquiera son suficientes para promover una restauración del crecimiento y el empleo. Cada



vez más los economistas, incluso en la filas de la burguesía, empiezan a asumir la emergencia de una depresión.

Antes del estallido del virus, Europa se acercaba a una tasa nula de crecimiento y junto con las principales economías del mundo se marchaba a una recesión. Estábamos asistiendo a una huelga de inversiones que tiene como base una declinación cada vez más marcada de la rentabilidad empresarial y ganancias corporativas. Por lo tanto, el sector privado no está en condiciones de liderar una recuperación económica. Más bien, lo que está en juego es quién va a lograr sobrevivir. La depresión plantea la depuración del capital sobrante. Vamos a transitar un escenario de quiebras, que es lo que se pretendió evitar con los rescates en esta última década luego de la crisis financiera de 2008. Los gobiernos europeos estarían apelando a nacionalizaciones de empresas, como acaba de ocurrir con Alitalia (ver nota de *Prensa Obrera*). Se trata de un recurso último por salvar al capital en crisis, pero esta tentativa tropieza con límites muy precisos. No olvidemos que son los propios Estados los que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, con un endeudamiento igual o superior a su PBI.

Los paquetes de estímulo pretenden ser financiados con más deuda, con lo cual se echa más sal a la herida. Esto vale para Francia, España e Italia -donde ha pegado con más virulencia la pandemia-, que cargan con índices muy superiores al promedio en materia de endeudamiento y déficit fiscal. Se estima un ascenso de la deuda pública que no se veía desde tiempos de guerra.

De acuerdo con algunas estimaciones, en Alemania pasaría del 61% de finales de 2019 a un 86% este año. En Francia lo haría del 101% al 141%, en España del 98% al 133% y en Italia se iría del ya abultado 137% al 181%.

Guerra comercial

La situación se vuelve más aguda desde el momento que la Unión Europea enfrenta esta calamidad sin poder armar un esquema de contención comunitario. Hasta ahora, cada nación, en gran medida, ha debido arreglarse con sus propios recursos, con el límite que supone el hecho que los miembros de la UE están inhibidos de emitir, resorte que está reservado al Banco Central Europeo. Madrid y Roma instaron a los miembros de la eurozona a mutualizar la deuda, con eurobonos respaldados por todos los miembros del espacio de la moneda común. Pero los países del norte, Alemania, Holanda y Austria, se negaron con el argumento de que ese pedido era un intento encubierto de los países meridionales para beneficiarse de ayudas a bajo precio, financiadas por los Estados más sólidos económicamente. La Comisión Europea propondría crear un fondo de 100.000 millones de euros que se alimentaría a partir de emisiones de deuda en nombre de la UE. Sería una especie de primera mutualización de deuda por la puerta de atrás aunque, en caso de concretarse, está lejos de satisfacer la ayuda que se viene reclamando.

Uno de los datos distintivos de la crisis actual con respecto de la de 2008 es precisamente el escenario de la guerra comercial, lo cual impide una acción concertada para enfrentar la pandemia. Las tensiones y

choques entre los integrantes de la zona euro echan más leña al fuego a las tendencias a la desintegración de la Unión Europea ya reinantes.

La expectativa es que el Banco Central Europeo anule los bonos que ha ido comprando a los Tesoros nacionales. Eso borraría aproximadamente una cuarta parte de las deudas públicas europeas y permitiría mitigar en lo inmediato, aunque sea parcialmente, el endeudamiento explosivo al que están echando mano. Pero esto es un arma de doble filo, pues activa otra bomba de tiempo como es una emisión gigantesca. Un empapelamiento de la moneda común en la escala que se insinúa provocaría una desvalorización sensible del euro y el riesgo de un abandono masivo del mismo hacia el dólar o hacia el oro, que emerge como el refugio último en caso de que la crisis termine arrastrando las principales divisas del planeta. Por supuesto, esto llevaría a un descalabro y fractura de las relaciones económicas internacionales y, por lo tanto, un salto inconmensurable en el desarrollo de la bancarrota capitalista.

Crisis social y política

El colapso actual económico está disparando una crisis social explosiva en la que se une la batalla por la sobrevivencia de los viejos y nuevos desempleados, a los que han quedado inactivos y que no reciben ingreso alguno o apenas una compensación parcial de lo que venían cobrando, que se suma la de la otra franja de la población que está concurrendo a sus tareas habituales pero que está expuesta al contagio sin que se cumplan los requisitos de protección adecuado y la presión de las patronales por retomar la producción de actividades no esenciales.

Este panorama es el caldo de cultivo para la reacción popular. En Italia, el país en que la pandemia ha pegado en forma más prematura, se combinan estallidos sociales en el sur, la región más pobre del país, con huelgas y protestas en las fábricas, que vienen reaccionado contra las condiciones precarias y riesgosas en las que se trabaja y forzando a las empresas a interrumpir la actividad productiva. El 25 de marzo hubo un paro nacional, que logró una considerable adhesión, pese a que fue convocado al margen de las centrales sindicales, que están sometidas e integradas al Estado.

La crisis social se potencia por la crisis sanitaria. Europa debe enfrentar este brote con su sistema de

salud deteriorado, como resultado de una política de austeridad que se ha profundizado los últimos años. Italia, para tomar un ejemplo, hizo un recorte de sus presupuestos de salud de 37.000 millones de euros en estos últimos cuatro años.

Esto empieza a tener una traducción en el plano político. Los gobiernos de turno, ya sean centroizquierdistas o derechistas están sufriendo una erosión acelerada. El debilitamiento del gobierno de Conte, al que se le reprocha haber reaccionado tardíamente frente a la propagación del virus, está siendo aprovechado demagógicamente por la derecha de Salvini. Pero igual suerte está soportando Boris Johnson, de filiación conservadora, y no se salva Macron, quien no ha salido indemne de la conmoción política provocada por la huelga contra la reforma jubilatoria, que se ha expresado en la derrota que acaba de sufrir en las elecciones municipales. Las exhortaciones que hacen los gobiernos europeos a la unidad nacional tienen partas cortas. Ingresamos en un escenario convulsivo que va a estar atravesado por giros, crisis y realineamientos políticos, explosiones sociales y levantamientos populares. El gran desafío planteado para la izquierda revolucionaria es que en este proceso irrumpa la clase obrera como un factor independiente en la crisis capitalista y abrir paso a una salida política independiente de los trabajadores.

La pandemia ha colocado al descubierto la incapacidad y los límites insalvables del Estado capitalista y de su clase dirigente para hacer frente a este flagelo. Ha puesto al rojo vivo la incompatibilidad que existe entre una organización social basada en el lucro y la defensa de la vida y salud de la población. En lugar de que los fondos públicos sean destinados a un rescate inviable del capital en crisis y quebrado, es necesario colocar los recursos al servicio de las necesidades populares, empezando por un combate en regla contra la pandemia. Esta tarea está reservada a los trabajadores, que deben tomarla en sus manos en la perspectiva de una reorganización integral del viejo continente sobre nuevas bases sociales. Al fracaso de los Estados capitalistas y a la desintegración del Unión Europea hay que oponerle gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de Europa.

Pablo Heller